

Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUGA (Reparto)
Ciudad

**REF.: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN
DIRECTA.**

**DEMANDANTES: EDWIN CORREDOR ACOSTA
LINA MARÍA MERA
SEBASTIÁN CORREDOR MERA
MARLECEER ACOSTA
MARÍA LUISA TORRES GARZÓN**

**DEMANDANDO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN –
RAMA JUDICIAL.**

LUIS FERNANDO GUERRERO CIFUENTES y **PEDRO NEL BONILLA MELÉNDEZ** mayores de edad, con domicilio en la ciudad de Santiago de Cali (Valle), identificados civil y profesionalmente como aparece al pie de nuestras correspondientes firmas, actuando en nuestra condición de Apoderados Judiciales de los señores **EDWIN CORREDOR ACOSTA**, actuando en su condición de afectado directo con la injusta privación de la libertad, la señora **LINA MARÍA MERA**, actuando en calidad de compañera permanente y a la vez como Representante legal su hijo menor de edad **SEBASTIÁN CORREDOR MERA**, y el señor **MARLECEER ACOSTA**, en calidad de hermano del afectado directo; quienes serán la parte demandante en este proceso, en cumplimiento al mandato a nosotros conferido respetuosamente presentamos **DEMANDA DE MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA**, consagrado en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, en contra de las entidades de Derecho Público en este caso **LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL**, representadas Legalmente por el señor Fiscal General de la Nación Doctor **EDUARDO MONTENEGRO LYNETT**, y la señora Directora Ejecutiva de Administración Judicial de la Rama Judicial y Doctora **CELINEA OROZCOTEGUI DE JIMÉNEZ** y/o quienes hagan sus veces y los representen ante los estrados judiciales a fin de obtener el reconocimiento y pago total de los daños y perjuicios Morales, Materiales y Daño a la Vida de Relación, que les fueron causados como consecuencia de la Privación Injusta de la Libertad que debió soportar el señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA**, al ser acusado injustamente del Delito de **VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PUBLICO**, dentro del Proceso Penal Radicado N° **76111-6000-165-2014-00904-00**, siendo privado de su libertad desde el 10 de mayo de 2014, hasta el 13 de agosto de 2014, cuando por parte del Juzgado 1° Penal del Circuito de Buga, ordenó su libertad por preclusión de la investigación, según solicitud de la Fiscalía 21 Seccional de Buga (Valle).

CAPÍTULO I.

1. DECLARACIONES Y CONDENAS

1.1.- **QUE SE DECLARE** civil, administrativa y solidariamente responsable a la **NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL**, por los perjuicios causados a los actores con motivo de la Privación Injusta de la Libertad que debió soportar el señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA**, dentro del Proceso Penal Radicado N° **76111-6000-165-2014-00904-00**, acusado del Delito de **VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PUBLICO**.

1.2.- **CONDENAR** a la **NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL**, a pagar a cada uno de los Actores o a quien sus derechos represente, los **PERJUICIOS MORALES**, como consecuencia de la injusta privación de la libertad que soportó el señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA**, y a los demás integrantes de su Núcleo Familiar, así:

Los Perjuicios Morales y Materiales los solicito según el pronunciamiento del Honorable Consejo de Estado, mediante la sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección A, radicación N° 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354), actor **LUIS CARLOS OROZCO OSORIO**, contra la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), con ponencia del Consejero **MAURICIO FAJARDO GÓMEZ**, los perjuicios morales por privación de la libertad se tasan así:

*(...) **PERJUICIOS MORALES - Reconocimiento en salario mínimo legal mensual vigente / PERJUICIOS MORALES - Indemnización equivalente a tiempo en que duró privado de su libertad.***

Conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea superior a 18 meses –como aconteció en el caso que dio origen al litigio sub examine–, se reconozca la suma equivalente a 100 SMLMV; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMLMV; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMLMV; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMLMV; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMLMV; asimismo si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 SMLMV; finalmente si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 SMLMV, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados. (Subrayas fuera de texto)

SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE PARA EL AÑO 2015 \$ 644.350

1. Para el señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA** (Afectado Directo), 50 s.m.l.m.v. a razón de \$644.350 = \$ 32'217.500
2. Para la Señora **LINA MARÍA MERA** (Compañera Permanente), 50 s.m.l.m.v. a razón de \$644.350 = \$ 32'217.500
3. Para el menor **SEBASTIÁN CORREDOR MERA** (hijo menor de edad), 50 s.m.l.m.v. a razón de \$644.350 = \$ 32'217.500
4. Para el señor **MARLECEER ACOSTA** (Hermano de la Víctima), 25 s.m.l.m.v. a razón de \$644.350 = \$ 16'108.750

TOTAL PERJUICIOS MORALES..... \$112'761.250

PERJUICIOS MATERIALES

1.3.- Condenar a la **NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL**, a pagar a favor de **EDWIN CORREDOR ACOSTA**, los **PERJUICIOS MATERIALES** sufridos con motivo de la injusta privación de la libertad padecida por él, correspondiente al lucro cesante por dejar de percibir salarios durante el tiempo en que permaneció detenido.

Para el señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA**, quien se desempeñaba como trabajador informal, pero debido que no tenía un salario fijo, la jurisprudencia y la ley disponen que se debe presumir que devenga un salario mínimo legal mensual vigente, el Actor permaneció por un lapso superior a los tres (3) meses privado de la libertad, más ocho (08) meses que se tarda una persona en conseguir trabajo una vez sale de la cárcel según indica el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses).

En cuanto al ingreso base para llevar a cabo la liquidación, se tomará el salario mínimo legal mensual vigente que en este caso es la suma de seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta pesos (\$644.350), aumentado el 25% por las prestaciones sociales que corresponden a la suma de \$ 161.087 para un total de \$ **805.437**, a favor del señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA**.

$$\begin{array}{rcl} \$805.437 \times 3 & = & \$2'416.311. \\ \$805.437 \times 8 & = & \$6'443.496. \end{array}$$

TOTAL PERJUICIOS MATERIALES: = \$8'859.807

La actualización de las cantidades según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre el momento que el Actor **EDWIN CORREDOR ACOSTA** fue privado injustamente de su libertad, hasta que se produzca el respectivo Auto que ponga fin al presente proceso, o el auto que liquide los perjuicios materiales.

Se debe aplicar la fórmula matemática financiera aceptada por el Honorable Consejo de Estado, teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada y la futura.

**(...) PERJUICIOS MATERIALES - Lucro Cesante / LUCRO CESANTE –
Reconocimiento de sumas dejadas de percibir durante la detención arbitraria**

La Sala estima procedente ordenar el reconocimiento y pago de una indemnización por este concepto, comoquiera que en el proceso está acreditado que la víctima, al momento de la privación de su libertad, ejercía una actividad laboral como empleado del ente demandado, pues precisamente con ocasión del acaecimiento de hechos ocurridos mientras ejercía funciones inherentes al cargo que desempeñaba, se le vinculó al proceso penal respectivo. Se precisa, además, que el lucro cesante se liquidará teniendo en cuenta el período consolidado comprendido entre el tiempo durante el cual los actores estuvieron privados de la libertad y el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral, comoquiera que no se encuentra demostrado en el plenario si el demandante fue reincorporado, o no y en qué momento, al empleo público que se encontraba desempeñando en el instante en el cual se hizo efectiva en su contra la medida de aseguramiento de detención preventiva que originó la producción de los daños cuya reparación deprecó el demandante en el libelo introductorio del presente litigio. (...) (Subrayas fuera de texto)

DAÑOS A LA VIDA DE RELACIÓN

1.4.- Condenar a la **NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL**, a pagar a los actores, como reparación o indemnización del daño de orden extramatrimonial por "**DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN**". Perjuicios que se debe a cada uno de los actores, o a quien represente sus derechos, en una cantidad de dinero liquidable en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria del Auto que ponga fin al presente proceso, atendiendo las determinaciones jurisprudenciales, perjuicios estos generados desde la injusta privación de su libertad del señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA**, afectándolos a ellos y a sus familia y dejando secuelas hasta el final de sus días, pues alteró su vida familiar y social, impidiéndole experiencias que hoy no pueden compensarse, las cuales se liquidaran así:

SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE PARA EL AÑO 2015 \$ 644.350

1. Para el señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA** (Afectado Directo), 50 s.m.l.m.v. a razón de \$644.350 = \$ 32'217.500
2. Para la Señora **LINA MARÍA MERA** (Compañera Permanente), 50 s.m.l.m.v. a razón de \$644.350 = \$ 32'217.500
3. Para el menor **SEBASTIÁN CORREDOR MERA** (hijo menor de edad), 50 s.m.l.m.v. a razón de \$644.350 = \$ 32'217.500
4. Para el señor **MARLECEER ACOSTA** (Hermano de la Víctima), 25 s.m.l.m.v. a razón de \$644.350 = \$ 16'108.750

TOTAL DAÑOS A LA VIDA DE RELACIÓN \$ 112'761.250

1.5°. CONDENA EN COSTAS:

Condenar a **LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL** al pago de las costas procesales de acuerdo al artículo 188 de la Ley 1437 de 2012.

INTERESES DE LA INDEMNIZACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1659 del Código Civil, todo pago se imputará a intereses. Por tanto, a los actores o a quienes sus derechos representen, al momento de la fecha de la ejecutoria de la Sentencia se les adeudarán los intereses que se causen, a la luz de los artículos 192 del Código de Procedimiento Administrativo, sujetándose a los parámetros de la Corte Constitucional.

Para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en los referidos artículos del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, se expedirá la primera copia de la ejecutoria de la Sentencia con destino a las Entidades convocadas y a los actores que represento, haciendo precisión sobre cual o cuales de las copias resultan idóneas para la efectividad de los derechos reconocidos. (Art. 115 del C.P.C.)

Que todos los pagos que se ordene hacer a favor de los actores o de quien represente sus derechos, les sean cubiertos en moneda de curso legal en Colombia, ajustando su valor con base en los índices de precios al consumidor certificados por el Departamento Administrativo

Nacional de Estadística (DANE) o por la entidad que eventualmente llegare a hacer sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 178 de Código Contencioso Administrativo.

Que se condene a la parte convocada al pago de costas y agencias en derecho Artículos 392 al 395 del C.P.C. y conforme a los pronunciamientos de la Corte Constitucional.

CAPITULO II

HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA ACCIÓN

Los hechos que sirven de fundamento para la presente acción, según lo narrado por mis poderdantes, en síntesis son los siguientes:

- 1) El día 10 de mayo de 2014, a eso de las 07:55 horas, el señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA**, fue privado de su libertad, por funcionarios de la Policía Nacional, en el Municipio de Buga (Valle), al ser acusado por el señor Agente de Tránsito **MARIO GERMAN MENESES MENESES**, de haberlo agredido físicamente.
- 2) Los Policiales acudieron al llamado que hizo la Central de Radio de Comunicaciones manifestando que en la calle 4 con carrera 23, el Guarda de Tránsito **MARIO GERMAN MENESES MENESES**, informaba el hurto de la motocicleta en la que se movilizaba el señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA**, pero al llegar los uniformados y solicitarle los documentos del velomotor, pudieron corroborar que la motocicleta era de su propiedad, y no había ningún problema con los documentos del rodante, resultando falsa la denuncia del Guarda de Tránsito, quien llamó a la Policía fue con otra intención.
- 3) Los policiales al corroborar que los documentos que acreditan la propiedad de la motocicleta estaban a nombre del señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA**, quien además era el mismo que la conducía, se pudieron enterar que el comunicado que había emitido por radio el Guarda de Tránsito **MARIO GERMAN MENESES MENESES**, era falso, pues se trataba de una discusión entre el Funcionario de Tránsito y el propietario de la motocicleta, por unas situaciones personales derivadas de problemas anteriores.
- 4) Al enterarse el señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA**, que los policiales habían llegado al lugar porque el señor Guarda de Tránsito **MARIO GERMAN MENESES MENESES**, había solicitado apoyo a los policiales con mentiras argumentando que su motocicleta era hurtada, se

ofuscó y reaccionó tirando al piso el casco protector, y de rebote alcanzó a golpear en el pie derecho al Funcionario de Tránsito, situación que aprovechó el señor **MARIO GERMAN**, para hacerlo capturar de los policiales y ponerlo a disposición de la Fiscalía por el delito de **VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PUBLICO**.

- 5) La fiscalía sin hacer el análisis integral al Informe Policial, donde los uniformados que conocieron el caso daban cuenta de la real situación, presentó al señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA** ante el señor Juez Promiscuo Municipal de Restrepo con Funciones de Control de Garantías, solicitando la legalización de la captura del Actor, quien a su vez declaró Legal la Captura e impuso Medida de Aseguramiento con reclusión domiciliaria.
- 6) El 13 de agosto de 2014, en Audiencia para resolver la preclusión de la investigación solicitada por la Fiscalía 21 Seccional de Buga (Valle), la señora Juez Primera Penal del Circuito de Buga, a quien correspondió Conocer la Causa, luego de analizar los testimonios y la motivación de la Fiscalía, decretar la Preclusión de la Investigación en favor del procesado señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA**, por la conducta punible de **VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PUBLICO**, al demostrada plenamente la atipicidad de la conducta investigada, decisión contra la que no se presentó recurso alguno por parte de la Fiscalía, ni por parte de la supuesta víctima **MARIO GERMAN MENESES MENESES**.
- 7) El señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA**, permaneció injustamente privado de la libertad por el termino de tres (03) meses y tres (03) días, es decir desde el día 10 de mayo de 2014, hasta el día 13 de agosto de 2014, en cumplimiento a la Medida de Aseguramiento con detención domiciliaria por parte del señor Juez Promiscuo Municipal de Restrepo con funciones de Control de Garantías, hasta que la señora Juez 1º del Circuito de Buga, decretó la Preclusión de la Investigación, expidiendo la Orden de Libertad inmediata a favor del señor **CORREDOR ACOSTA**.

CAPÍTULO III.

CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN, FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES

Nuestra Norma Constitucional, establece como Derecho Fundamental de las personas el derecho a la Libertad, Debido Proceso y Presunción de Inocencia, comprometiendo al Estado a garantizarlos a través de

las normas que regulan tales derechos y establecen los presupuestos que se exigen, cuando excepcionalmente la Ley dispone recurrir a la privación de la libertad.

Es preciso resaltar que tanto la Constitución Política como la Ley, le permiten a la Fiscalía General de la Nación solicitar se profiera contra una persona medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva, por causas legales, pero no se puede perder de vista que se trata de una medida restrictiva de un derecho fundamental, cual es el de la libertad y que, por ello, no es posible ordenarla ni extenderla en el tiempo sin una justa causa.

Ha señalado la Corte Constitucional en Sentencia C-327 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz.

"...Así pues, aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los límites del mismo.."

Cabe anotar que los derechos fundamentales a la libertad personal y la presunción de inocencia, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala: Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria, nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta;

Así mismo, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 7º establece:

- "1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios."

La Constitución Nacional en su Artículo 90, establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables y fueren causados por acción u omisión de las autoridades públicas, en razón a ello, ya el Consejo de Estado ha emitido reiteradas jurisprudencias condenando a la Nación por esta clase de conductas asumidas por autoridades públicas. En el caso concreto, existió un comportamiento irregular por las Convocadas, precisamente por la Fiscalía y la Rama Judicial, a través del Juez Promiscuo Municipal de Restrepo (Valle) con función de Control de Garantías, los servidores públicos, no realizaron una verdadera verificación de la información, para establecer si realmente mi poderdante incurrió o no en la conducta penal que le imputó la Fiscalía.

Es inaceptable que la Fiscalía General de la Nación, solicite medida de aseguramiento, formule imputación de cargos, contra una persona privada injustamente de la libertad, a pesar que en el Informe Policial rendido bajo la gravedad de juramento el Patrullero **LUIS LÓPEZ**, quien conoció directamente el caso, relataba clara y pormenorizadamente lo sucedido, donde se demostraba la falacia del Servidor de Tránsito, **MARIO GERMAN MENESES MENESES** informe con el que se demostraba igualmente la atipicidad de la conducta punible de la que se acusaba al señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA**, pues en ningún momento lo había agredido, y pese a esta situación la fiscalía imputó cargos y solicitó medida de aseguramiento en contra del señor **CORREDOR ACOSTA**, sin contar con elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que le permitiera no solo a la Fiscalía si no al señor Juez Promiscuo Municipal de Restrepo con funciones de Control de Garantías inferir razonablemente que el señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA** era autor o participe del delito **VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PUBLICO**, que en la audiencia se le imputó, tipo penal establecido en el artículo 429 del C.P.

El daño antijurídico aquí presentado, ha producido perjuicios materiales y morales y daños a la vida de relación a cada uno de los Convocantes, en su calidad acreditada en el proceso, pues las actuaciones de la administración de justicia de acuerdo a lo probado y relatado en los hechos de la presente solicitud, son derivados de la responsabilidad objetiva del Estado por daño especial, conforme a los artículos 2º, 9º, 13 y 90 de la Constitución Nacional.

Necesario resulta recordar que el artículo 90 de la Constitución Política consagra la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables por acción u omisión de sus autoridades públicas, y por ello, se señala que la responsabilidad Estatal se ha determinado de manera objetiva, porque basta que se pruebe la existencia de un daño antijurídico que el ciudadano no tenga la obligación de asumir. La Ley 270 de 1996 dispone lo siguiente:

“ARTICULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

ARTICULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

ARTICULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

ARTICULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

ARTICULO 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.”

Con relación al **ERROR JUDICIAL**, la Jurisprudencia del Consejo de Estado respecto a la responsabilidad del Estado en la sentencia del 25 de enero de 2001, expediente 11413, expresó:

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Concepto / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Daño antijurídico

“El desarrollo del concepto de privación injusta de la libertad, con base únicamente en la interpretación del artículo 90 de la Constitución, podría provenir de la definición misma del daño antijurídico, según el cual éste se presentaría cuando la persona que ha sido privada de la libertad no tenía el deber jurídico de soportar tal privación. En este orden de ideas, podría concluirse que la privación injusta de la libertad, como hecho generador del deber del Estado de reparar los daños antijurídicos causados, se produciría no sólo como consecuencia de la falla en el servicio de la Administración de Justicia -régimen subjetivo de responsabilidad-, sino también al margen de la ilicitud o licitud de la decisión, pues basta la antijuricidad del daño que, en este caso, está marcado por la injusticia de la detención al margen de la licitud de la medida judicial”

De igual manera el Honorable Consejero Ponente: **MAURICIO FAJARDO GÓMEZ** Proceso: 25000-23-26-000-1994-09817-01, en sentencia 13168 de 4 de diciembre de 2006 indicó:

En cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico, sea que tenga causa en una providencia errada o en una providencia ajustada a la ley.

No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio.

Sobre el Daño Especial, por privación ilegal de la libertad, el Consejo de Estado, en Sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección A, radicación N° 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354), actor **LUIS CARLOS OROZCO OSORIO**, contra **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, de octubre 17 de 2013, Consejero Ponente **MAURICIO FAJARDO GÓMEZ**, se pronunció en los siguientes términos:

(...)

f. Las aludidas características que acompañan a la libertad constituyen las razones por las cuales, precisamente, es la excepcionalidad el rasgo distintivo y, al propio tiempo, el principio que informa tanto las regulaciones normativas como la aplicación de los supuestos en los cuales se encuentra jurídicamente avalada la privación de la libertad, en especial cuando a ello se procede, por parte de las autoridades judiciales, como medida precautelativa dentro un proceso penal, mientras se adelantan las etapas de investigación y/o de juicio y no se cuenta, por tanto, con sentencia condenatoria alguna que hubiere establecido, de manera cierta y más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del respectivo sindicado.

Tanto el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como la legislación interna colombiana, al igual que la Jurisprudencia Constitucional y la de lo Contencioso Administrativo en Colombia, han subrayado reiteradamente la importancia de ese postulado de la excepcionalidad respecto de los eventos en los cuales puede haber lugar a la legítima privación de la libertad como medida distinta de la materialización de la pena impuesta en una sentencia judicial debidamente ejecutoriada; sin embargo, en relación con este extremo, baste con destacar, en este lugar, lo que a este respecto dispone el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas –PIDCP, incorporado en el ordenamiento jurídico colombiano por medio de la Ley 74 de 1968 y de aplicación preferente en el orden interno de conformidad con lo preceptuado en el artículo 93 de la Constitución Política, así como lo sostenido por la Sección Tercera de esta Corporación:

“PIDCP. Artículo 9.

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”.

“Por consiguiente, la privación de la libertad (y dentro de ella la medida de detención preventiva) debe ser adecuada, esto es, cumplir los requisitos que se desprenden directamente de la norma constitucional, pues, de no hacerlo se vulnera el derecho fundamental a la libertad personal. Los condicionamientos a los que se hace referencia son:

1. Debe fundamentarse en una causa que esté previamente prevista en la ley. En otras palabras, la autoridad que asume la medida en todo momento está sujeta al más estricto principio de legalidad. Se exige como presupuesto la existencia de indicios y medios probatorios que desde un punto de vista racional arrojen una posible responsabilidad penal del individuo inculpado.

(...)

3. Al ser una medida cautelar su finalidad no es represiva, se encamina principalmente a prevenir diferentes circunstancias: la fuga del sindicado, su presencia en el proceso, la efectividad de la sentencia o impedir la continuación de su actividad delictiva.

(...)

6. La medida debe responder al criterio de excepcionalidad. En otros términos, la detención preventiva debe asumirse cuando no existe otra forma de asegurar los objetivos señalados en el numeral 3.

7. La detención preventiva siempre debe responder al principio de proporcionalidad, es decir que debe constituir un medio adecuado para la finalidad que se pretende alcanzar.

Aun cuando los anteriores presupuestos se cumplan, la detención provisional sigue constituyendo la intervención más delicada en el derecho de libertad personal, argumento que se encuentra plenamente demostrado porque su operatividad se desprende de la incertidumbre, como quiera que aún no existe en el proceso una sentencia en la cual se declare la responsabilidad penal”.

En esta misma dirección marcha lo clara y categóricamente preceptuado por el artículo 295 de la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal colombiano, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 295. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional; sólo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales” (énfasis añadido).

g. El carácter eminentemente excepcional que tanto los compromisos internacionales asumidos por Colombia y las propias leyes de la República, como la Jurisprudencia nacional en diversos órdenes, que aquí se han relacionado y que de manera uniforme atribuyen e identifican como nota que debe acompañar necesariamente al instituto de la detención preventiva que respecto de un determinado individuo pueden decretar, en específicos supuestos, las autoridades judiciales competentes durante el curso de la investigación y/o del juicio penal, esa excepcionalidad –se itera– pone de relieve, por sí misma, que dicho instituto –en tanto excepcional– de ninguna manera podría considerarse entonces y menos podría llegar a convertirse en una carga generalizada que todo individuo tuviere que soportar por el solo hecho de vivir en sociedad, cuestión que evidencia, de manera palmaria, la antijuridicidad del daño que se irroga a quien se le impone dicha carga a pesar de que posteriormente se le releva de responsabilidad penal; en modo alguno podría exigírsele a un individuo que asuma como una carga social normal o jurídica una situación que por definición es excepcional y, por tanto, contraria a la regla general constituida por el principio, valor y a la vez derecho fundamental a la libertad.

*h. En conclusión, si se atribuyen y se respetan en casos como el sub judice los alcances que en el sistema jurídico nacional corresponden tanto a la **presunción constitucional de inocencia** como al principio-valor-derecho fundamental a la **libertad** - cuya privación cautelar está gobernada por el postulado de la excepcionalidad, según se ha expuesto–, resulta indiferente que el obrar de la*

Administración de Justicia al proferir la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y luego absolver de responsabilidad penal al sindicado en aplicación del principio in dubio pro reo, haya sido un proceder ajustado o contrario a Derecho, en el cual resulte identificable, o no, una falla en el servicio, un error judicial o el obrar doloso o gravemente culposo del agente judicial, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado, devendrá en intrascendente –en todo sentido– que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la Administración de Justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo.

*Y se habrá causado un **daño especial** a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño redundará en beneficio de la colectividad - interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias—, sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, a aquélla persona en quien, infortunadamente, se concretó el carácter excepcional de la detención preventiva y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el tantas veces aludido artículo 90 constitucional. (...).*

En el caso en concreto, se dan los presupuestos de la sentencia del Honorable Consejo de Estado, pues se presenta un **DAÑO ESPECIAL**, por cuanto el señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA**, fue capturado por un presunto delito, que si la Fiscalía General de la Nación hubiese realizado la correspondiente investigación de manera efectiva que como ente investigador le correspondía, se habría percatado en ese momento de la inexistencia de la conducta punible y así se hubiese evitado la privación injusta de la libertad del Actor, quien permaneció por más de 3 meses con la medida de detención domiciliaria, configurándose de esta manera, un daño irreparable para mi prohijado y su núcleo familiar, a quienes también se les ocasionaron perjuicios materiales y morales por la aflicción y sufrimiento que tuvieron que soportar en razón a la privación injusta de la libertad del señor **CORREDOR ACOSTA**.

Se puede concluir que el señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA** no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le ocasionó, el cual debe ser calificado como antijurídico, lo que determina la consecuente obligación para la Administración Pública de resarcir el daño a mi representado y a su núcleo familiar.

CAPITULO IV.

PRUEBAS DOCUMENTALES

- 1) Registro Civil de Nacimiento y Fotocopia de cédula de ciudadanía del señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA**.
- 2) Registro Civil de Nacimiento y Fotocopia de cedula de ciudadanía de la señora **LINA MARÍA MERA**.
- 3) Certificado Extra Juicio expedido por la Notaría Primera de Buga, que da Fé, de la convivencia en Unión Marital de Hecho entre el señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA** y la señora **LINA MARÍA MERA**, de cuya relación procrearon un hijo menor de edad de nombre **SEBASTIÁN CORREDOR MERA**.
- 4) Registro civil de nacimiento del menor **SEBASTIÁN CORREDOR MERA**
- 5) Registro Civil de Nacimiento y fotocopia de cedula de ciudadanía del señor **MARLECEER ACOSTA**.
- 6) Constancia de fecha 13 de agosto de 2014, suscrita por el señor **MILTON JAIME LÓPEZ CASTAÑO**, Secretario del Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga, dando cuenta de la presentación a la audiencia de Preclusión de la Investigación solicitada por la Fiscalía 21 Seccional de Buga (Valle), dentro del proceso radicado bajo el N° **76111-6000-165-2014-00904-00**
- 7) Fotocopia del Auto Interlocutorio N° 042 de agosto 13 de 2014, emanado del Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga, mediante el cual resolvió decretar la Preclusión de la Investigación en favor del procesado señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA**, por la conducta punible de **VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PUBLICO**, al demostrada plenamente la atipicidad de la conducta investigada, decisión contra la que no se presentó recurso alguno por parte de la Fiscalía, ni por parte de la supuesta víctima **MARIO GERMAN MENESES MENESES**.
- 8) Certificado de Libertad a nombre del señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA**, por el delito de **VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PUBLICO**, quien permaneció privado de la libertad durante el lapso comprendido entre el 10/05/2014 y el 13/08/2014 a quien se le ha concedido la libertad por preclusión de la investigación/Cesación. por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga.

CAPITULO V.

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

Se reclama el pago de los perjuicios Materiales, Morales y Daños a la Vida de Relación a favor del señor **EDWIN CORREDOR ACOSTA** y su núcleo familiar, donde la sumatoria de todas las pretensiones para efectos de la cuantía en la presente solicitud ascienden en total a la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$234'382.307)**

DAÑOS MATERIALES.....	\$8'859.807
DAÑOS MORALES.....	\$112'761.250
DAÑOS A LA VIDA DE RELACIÓN.....	\$112'761.250
TOTAL.....	<u>\$234'382.307</u>

CAPITULO VI.

COMPETENCIA.

Por el factor territorial y la cuantía, el trámite de este medio de Control corresponde a los Juzgados Administrativos del Circuito de Buga, según lo establecido en el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.)

CAPITULO VII.

REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

En cumplimiento a las disposiciones legales previstas en la ley 640 de 2001 y 1285 de 2009 sobre la obligatoriedad de agotar la conciliación prejudicial en materia administrativa, esta etapa se agotó el día 29 de julio de 2015 ante la PROCURADURÍA 60 JUDICIAL I para ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE CALI, de la cual se anexa a la demanda.

CAPÍTULO VIII

MEDIO DE CONTROL

El Medio de Control incoado es la Reparación Directa, establecida en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo y demás normas concordantes.

CAPITULO IX.

ANEXOS.

1. Poderes para actuar.
2. Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
3. Copia de la demanda para los traslados a las demandadas y para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.
4. Copia de la Demanda en Medio Magnético CD-ROOM

CAPITULO XI.

NOTIFICACIONES.

- 1) La **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** en la calle 25 Nte. Nº 6A 11 B/Santa Mónica, Cali.: E-Mail :: oficina.juridica@fiscalia.gov.co
- 2) La Entidad Estatal **RAMA JUDICIAL** en la Calle 72 Nº 7 - 96 Bogotá D.C., o en la Carrera 5 Nº 12-28 Piso 5 Cali (Valle), E-mail dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 3) La **DEFENSA NACIONAL JURÍDICA DEL ESTADO**, Calle 70 No 4 - 60 Bogotá D.C. Teléfono: 2558955 Extensiones: 406 - 407 E-Mail/ conciliaextrajudicial@defensajuridica.gov.co
- 4) Mis representados, por conducto del Apoderado, en la Calle 13 Nº 4-25, Edificio Carvajal, Oficina 10-04, Telf. 888 61 64 Cali (Valle).
- 5) Los suscritos Apoderados, en la Calle 13 Nº 4-25 Oficina 10-04, Edificio Carvajal Cali (Valle), Teléfono Nº. (2) 888 61 64 E-mail lufegue@hotmail.es o pedronel611@hotmail.com, de antemano muy respetuosamente solicitamos y autorizamos al señor Procurador que las notificaciones se realicen a través de los correos electrónicos antes citados, de conformidad con lo dispuesto en el C.P.A.C.A

Sírvase señor Juez reconocernos personería para actuar en el proceso en calidad de apoderados de la parte Actora.

Del señor Juez, atentamente,



LUIS FERNANDO GUERRERO CIFUENTES
C.C. N° 16'228.389 de Cartago (Valle)
T.P. N° 195.976 del C.S.J.



PEDRO NEL BONILLA MELÉNDEZ
C.C. 4.252.333 de Soata (Boyacá).
T.P. 120.928 del C.S.J.